

**Movimientos sociales y derechas en Paraguay (2015-2016),  
Brasil (2018-2020) y Colombia (2018-2020)**

**Lorena Soler**

**Mónica Nikolajczuk**

**Enzo Scargiali**

**Ana Belén Mercado**

Universidad de Buenos Aires/CONICET/CLACSO

*Introducción*

Los movimientos sociales han adquirido protagonismo en la coyuntura latinoamericana actual en el contexto de la recomposición heterogénea del mapa político de la región. La llegada al poder de gobiernos de derecha ha torcido la correlación de fuerzas imperante durante el periodo progresista-populista iniciado a principios del presente siglo (Soler, 2021).

La investigación sostiene que tras el ascenso de los gobiernos de Horacio Cartes (2013-2018) en Paraguay, de Jair Bolsonaro (2018) en Brasil y de Iván Duque (2018) en Colombia, se activa un dispositivo basado en la *acumulación* de luchas previas protagonizadas por los movimientos sociales y se inicia un nuevo ciclo de protesta social.

Este ciclo se caracteriza por una composición social heterogénea; por la toma del espacio público a partir de la multiplicación de las manifestaciones masivas en las calles; así como por nuevas expresiones a través de las redes sociales tras la pandemia por COVID-19; por una revitalización de la narrativa antineoliberal conjugada con un discurso identitario y/o ecoterritorial; y finalmente por una articulación entre movimientos urbanos y rurales. Así, mientras que en Brasil la protesta social se reactiva ante el discurso excluyente y la avanzada de políticas

conservadoras en el gobierno de Jair Bolsonaro, en Paraguay y Colombia las demandas giran en torno a las políticas de ajuste estructural y la violencia estatal y paraestatal.

Concretamente, se analiza el ciclo de acción colectiva protagonizado por el *Congreso Democrático del Pueblo* contra las leyes de Alianza Público-Privada y de Defensa Nacional y Seguridad Interna en Paraguay (2015-2016); por el movimiento estudiantil *Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior* (ACREES) y por la *Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior* (UNEES) contra el ajuste económico y la violencia del gobierno de Iván Duque en Colombia (2018-2020); y por *#EleNão* contra el ascenso y las políticas de Jair Bolsonaro en Brasil (2018-2020).

El abordaje se robustece con la implementación de la perspectiva de la sociología histórica de tiempo presente. A partir de la misma se reconstruyen las condiciones de surgimiento y emergencia de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) y se analizan los actores en coyunturas concretas, desde la contemporaneidad del fenómeno. Asimismo, en tanto la región puede ser comprendida como una unidad en la diversidad (Carrera Damas 1999) el método comparado se vuelve vital en la construcción de categorías amplias que puedan explicar la especificidad regional de los fenómenos y la particularidad de los casos bajo estudio.

En este sentido las variables seleccionadas se inscriben en la intersección entre estructura y agencia a través del análisis de las dinámicas concretas de la acción colectiva; demandas, repertorios de acción y vínculos con el poder institucionalizado. Si bien consideramos que resulta vital indagar en los sentidos que sustentan la acción, nuestro estudio se inserta en la perspectiva clásica de los procesos políticos y, por ello, la construcción identitaria de los movimientos sociales es analizada como elemento explicativo, pero no estructurante, como así lo conciben los estudios sobre el paradigma identitario (Retamazo, 2010).

El artículo se divide en cuatro apartados. El primero explicita la perspectiva metodológica y la trayectoria de investigación. El segundo repone los principales debates sobre los movimientos sociales latinoamericanos y abre posibles vectores de análisis sobre el vínculo entre éstos y las derechas latinoamericanas. En tercer lugar—y como núcleo principal de esta contribución—se aborda empíricamente el problema y se analizan las demandas, la composición social y los repertorios de acción de los movimientos sociales bajo estudio durante los gobiernos de derecha en Paraguay, Brasil y Colombia. Finalmente, se reponen los hallazgos principales de la investigación y se presentan posibles derivas para trabajos futuros.

*La constitución de un objeto de estudio: perspectiva, método e instrumentos*

El objetivo de la investigación es explicar la acción de los movimientos sociales latinoamericanos en una coyuntura histórica concreta, el ascenso de las derechas del siglo XXI. Se propone un análisis que no se instala únicamente en la temporalidad más reciente, sino que, además, indaga en los condicionantes sociohistóricos que intervienen en el desarrollo del nuevo ciclo de protesta. En este sentido, el artículo es tributario de la sociología histórica de tiempo presente como perspectiva de análisis.

La misma posibilita un estudio basado en la intersección de contextos estructurales y experiencias de grupos (Skocpol 1994) y propone una concepción del tiempo como categoría histórica y como perspectiva metodológica. La propuesta responde a un proyecto de hibridación, donde historia y sociología logran encontrarse sin perder las riquezas de sus propios núcleos disciplinares. En rigor, la sociología histórica permite analizar los hechos únicos a partir de la historia dentro de modelos propios de la sociología (Bonnell 1980). Desde la mirada relacional y sociohistórica analizamos a) las dimensiones materiales de la acción colectiva emprendida por los movimientos sociales abordados, dando cuenta de las trayectorias de las organizaciones y la naturaleza de sus demandas para los tres casos; b) las características de las fuerzas de derecha y las políticas neoliberales y represivas promovidas; y c) el vínculo particular entre ambos actores y su incidencia en el nuevo ciclo de acción colectiva.

La recolección y sistematización de datos se realizó a través de la construcción de una matriz de datos que aborda de forma simultánea en los movimientos sociales bajo análisis, tanto en su dimensión histórica como coyuntural. A partir de la matriz comparativa es plausible reconstruir y analizar las trayectorias colectivas con el objetivo de orientar el fenómeno temporal y espacialmente y determinar los objetivos manifiestos y declarados de los movimientos sociales estudiados. En esta labor se ha hecho hincapié en el contexto sociohistórico de surgimiento y se ha explorado en la naturaleza y alcance de sus principios constitutivos. Asimismo, se ha reconstruido la composición social y analizado los repertorios del nuevo ciclo de acción colectiva, enfocándonos en las organizaciones o colectivos sociales que integran los movimientos estudiados con el fin de indagar en las diferentes líneas ideológicas que convergen en los mismos, así como en las distintas modalidades de acción que aporta cada organización.

El recorte empírico de los casos seleccionados responde a una evaluación de los recursos materiales y los plazos fijados para llevar a cabo la investigación, por lo que se han ponderado cuestiones como el acceso a la información disponible en

distintas fuentes y a los y las informantes claves pertenecientes a las agrupaciones mencionadas. Como consecuencia, han quedado excluidos del análisis casos de interés y de valor científico, como el movimiento estudiantil chileno, que encabezó a fines de 2019 un estallido social de suma relevancia a nivel regional (Ganter et al. 2022), y el movimiento indígena ecuatoriano, que impulsó masivas protestas callejeras en el marco de la implementación de un ajuste estructural por parte del gobierno de Lenín Moreno, en el mismo año (Parodi y Sticotti 2020; Ramírez Gallegos 2020).

*Los movimientos sociales latinoamericanos: derivas conceptuales y procesos sociobistóricos*

El campo de estudio de los movimientos sociales ha ido mutando con el correr de los años en función de los nuevos interrogantes y referentes empíricos emergentes. Hacia fines de la década de 1960, el creciente aumento de conflictividad social mostró las limitaciones de las teorías funcionalistas dando lugar a la emergencia del paradigma estratégico, cuya principal característica fue la exaltación de la capacidad de agencia de los actores sociales (Icart y Schilman 2004), expresándose especialmente a través de la teoría de la movilización de recursos.

En el marco del paradigma estratégico como respuesta a la necesidad de explicar el vínculo y dinámicas existentes entre acción colectiva y sistema político surge la teoría de los procesos políticos cuyos principales referentes han sido Tilly (1998) con la noción de conflicto político que permite superar la idea de demanda o agravio. A su vez, McAdam, McCarthy y Zald (1999), desarrollan los conceptos de las oportunidades políticas, de las estructuras de movilización en referencia a las formas de organización y de los procesos enmarcadores como los elementos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción. En este mismo espacio teórico-conceptual, Tarrow indaga en los ciclos de movilización o ciclos contenciosos al referirse a una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación con difusión rápida de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados, con un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; con marcos nuevos para la acción colectiva y con una combinación de participación organizada y no organizada (1997, 263). Nuestra investigación se sustenta sobre el desarrollo de distintos ciclos contenciosos en América Latina, en particular a partir del ascenso de las derechas regionales, por lo que este aporte resulta especialmente fecundo.

En paralelo, surgen conceptualizaciones en torno a los nuevos movimientos sociales con el fin de relacionar a estos actores con los cambios culturales y su historicidad (Touraine 1987) y con ello explicar la irrupción de

nuevas identidades colectivas (Melucci 1994). Sin embargo, como advierte Diani (2015), hasta la década de 1990, la ausencia de una discusión sobre el concepto de movimiento social se solía atribuir a la heterogeneidad e incompatibilidad entre los diferentes enfoques, que habría hecho imposible todo intento de síntesis. El fenómeno de globalización trajo consigo nuevas dinámicas y preguntas que han sido problematizadas desde el campo de los movimientos sociales. En este contexto resulta especialmente importante la contribución de Castell (1996) quien ha intentado explicar el vínculo entre estructura y acción en coyunturas de cambio social, asociando acción colectiva a procesos de consumo y resaltando la importancia de los conflictos identitarios con el surgimiento de una sociedad red.

Para los autores Della Porta y Diani (2011) los movimientos sociales y las acciones de protesta se han convertido en un componente de las democracias occidentales y, por ello, ha proliferado su estudio, logrando advertir ciertos grupos de preguntas recurrentes que atraviesan y guían el campo de análisis de los movimientos sociales desde contribuciones clásicas hasta los debates contemporáneos. El primer grupo de preguntas se refiere a la relación entre cambio estructural y las transformaciones en los patrones del conflicto social y hace referencia a preguntas como ¿Podemos concebir los movimientos sociales como expresiones de un conflicto? El segundo grupo problematiza el rol de las representaciones culturales en los conflictos sociales: ¿Cómo se transforman los problemas sociales en objetivos potenciales de la acción colectiva? El tercer conjunto de preguntas se inscribe en los valores, intereses e ideas que se involucran en la acción colectiva: ¿Qué papel desempeñan las identidades y los símbolos, las emociones, las organizaciones y las redes en la explicación del surgimiento y la continuidad de la acción colectiva? Finalmente, surgen los cuestionamientos sobre cómo ciertos contextos culturales, sociales y/o políticos afectan a la forma que adopta un movimiento social y a sus correspondientes posibilidades de éxito; es la pregunta por las características de los sistemas institucionalizados y las influencias recíprocas entre sistema y acción.

Como puede observarse, proponemos un análisis que se articula de manera directa a los interrogantes clásicos que permean los estudios sobre movimientos sociales a nivel global, pero con preeminencia de una mirada puesta en el vínculo entre sistema político y movimiento social. Asimismo, proponemos una lectura compleja de los movimientos sociales que problematice la especificidad que caracteriza al fenómeno en la región latinoamericana. En América Latina, estos cuestionamientos primigeniamente se expresaron a través del predominio de estudios en torno a la cuestión rural, campesina e indígena, y obrera, a partir de los

trabajos sobre los movimientos sindicales y los populismos (Calderón y Jelin 1987) para luego enraizarse en la teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, visible en un conjunto de acciones colectivas, marcadas por su carácter local y puntual (Svampa 2009).

Este pasaje, que se inicia hacia la década de 1980, se intensifica una década después cuando el neoliberalismo como modelo económico y societal genera tensiones crecientes, estallando en crisis que se extienden entre 1994 y 2005 en toda la región. Tales crisis aglutinan importantes niveles de conflictividad social, de inestabilidad política y de recesión económica. En consecuencia, se experimenta la deslegitimación y resquebrajamiento del paradigma neoliberal como instrumento de ordenamiento de las sociedades. En este escenario, los NMS se configuran definitivamente como los nuevos actores de la política, desbordando la institucionalidad y produciendo nuevas subjetividades autónomas que buscan reformar y renovar el orden de gobierno (Tapia 2008).<sup>1</sup>

La progresiva acumulación de las luchas sociales contra las reformas neoliberales y la apertura de un nuevo ciclo de acción colectiva protagonizado, particularmente, por los sectores subalternos (Taddei, Seoane y Agranatti 2006) rehabilita el concepto de movimientos sociales en un sentido “fuerte” (Svampa 2017). En efecto, los NMS inician el tránsito de una configuración fundamentalmente subalterna a una reconfiguración tendencialmente antagonista (Modonesi 2008).

En paralelo a este proceso de revitalización de las luchas de los sectores subalternos, surgen dos campos políticos e ideológicos novedosos con los cuales los movimientos sociales latinoamericanos se relacionan de manera diversa, articulando distintas estrategias colectivas. Por un lado, emergen las nuevas experiencias populistas donde conviven, de manera contradictoria, la tendencia a la inclusión política y social con un pacto con el capital económico (Soler 2019). La relación de estos gobiernos con los movimientos sociales transita de las tensiones creativas, como fruto de una serie de retroalimentaciones y sinergias, a las tensiones paralizantes, caracterizadas por posiciones más polarizadas y menos dialógicas (Bringel y Falero 2016).

Por otro lado, se fortalecieron las actuales derechas latinoamericanas. Tanto las que permanecieron en la dirección de los gobiernos como en la oposición consolidan su posición a partir de la crisis de hegemonía abierta en el año 2008 con la crisis económica mundial y el relativo desgaste de la narrativa populista-

---

<sup>1</sup> Este fenómeno dio lugar a profusas contribuciones académicas sobre el tema. Véase Dos Santos 2004; Taddei, Seoane y Algranattz 2006; Borón 2007; Zibechi 2009; Svampa 2010; Modonesi y Rebón 2011; Melucci 2015.

progresista. Estas derechas apelan a nuevas estrategias de acción e intervención en la esfera política (Luna y Rovira Kaltwasser 2014) y se distinguen por su vínculo con la democracia liberal en un sentido instrumental, por una narrativa pospolítica que propicia la dilución de la conflictividad social en términos clasistas y por su novedosa composición social (Soler 2021).

La política económica que desarrollan se centra en una reedición del neoliberalismo en un nuevo mundo signado por una lógica financiarizada y bipolar: privatizaciones, liberalización de los mercados, priorización de Tratados de Libre Comercio (TLC) antes que comercio interregional, apertura económica, reducción del gasto social y endeudamiento. Para ello, interponen un recurso propio de las viejas derechas: el uso de la violencia y de las fuerzas de seguridad en un proceso creciente de militarización del territorio y persecución de la oposición política.

Lo que se evidencia durante este periodo es que dónde las nuevas derechas toman el ejercicio del poder se inicia un nuevo ciclo de acción colectiva y de protesta social protagonizado por los movimientos sociales latinoamericanos y caracterizado por un malestar social generalizado respecto de modelos de acumulación basados en el neoliberalismo y de sistemas políticos excluyente (Rebón y Ruiz Encina 2020). Sin embargo, poco se ha dicho sobre la forma en que las fuerzas de derecha y los movimientos sociales se vinculan en este escenario y, particularmente, cómo incide ese vínculo en la lucha popular. De los trabajos existentes, destacamos los estudios de caso (Tohá 2020; Ramírez Gallego et. al. 2020; Palacios-Valladares 2020) y desde una mirada comparativa ponderamos las producciones de Rebón y Encina (2020); Bringel (2020); Ventura y Billion (2020), Lusting (2020) y Barragan Manjón et al. (2020). Además, se destacan los estudios acerca de las dinámicas y estrategias de los movimientos sociales en la región en el contexto de pandemia y pos-pandemia de Rossi (2023) y Abers, Rossi y von Bulow (2021).

#### *El nuevo ciclo de acción colectiva durante los gobiernos de la “nueva” derecha en Paraguay, Brasil y Colombia*

Con la llegada al poder de los gobiernos de derechas en Paraguay (2013-2018), Colombia (2018-2022) y Brasil (2018-2022), los movimientos sociales iniciaron un nuevo ciclo de protesta basado en la acumulación de las luchas previas en décadas anteriores. A partir del análisis de la matriz comparativa, de los discursos en los medios masivos de comunicación y de la realización de entrevistas a líderes sociales se analiza la acción colectiva protagonizada por el *Congreso Democrático del Pueblo* contra las leyes de Alianza Público-Privada y de Defensa Nacional y Seguridad Interna en Paraguay (2015-2016); por el movimiento estudiantil nucleado

en la *Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES)* y en la *Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES)* contra el ajuste económico y la violencia del gobierno de Duque en Colombia (2018-2020); y por *#EleNão* contra el ascenso y las políticas de Bolsonaro en Brasil (2018-2020).

*La revitalización de la acción colectiva ante las políticas neoliberales*

En Paraguay, la transición democrática se caracteriza por la emergencia de luchas sociales—protagonizadas por actores del campo popular—que rápidamente capitalizan la estructura de oportunidad abierta en el campo político y legal (Palau, Ayala, Coronel y Yuste 2018). Asimismo, la incapacidad de los partidos tradicionales para mediar entre el Estado y la sociedad civil y su desvinculación de los liderazgos de base impusieron a los movimientos sociales como principales protagonistas de la época (Morínigo 2002).

Es con la conformación del Congreso Democrático del Pueblo (CDP) en 2002 que se logran las condiciones necesarias para contrarrestar las presiones de los organismos internacionales de crédito y de algunos actores locales que veían en el proceso la oportunidad de consolidar la fortuna conseguida en el periodo anterior vía adquisición o participación en consorcios (Nikolajczuk 2018). El 15 de mayo se lleva a cabo su primera manifestación con más de mil delegados. Las principales demandas fueron la derogación de la ley 1.615 de reforma del Estado<sup>2</sup>, de la ley de reforma de la banca pública, del anteproyecto de ley antiterrorista, del proyecto de ley de Concesión de las Rutas y del IVA agropecuario. Sus banderas eran “contra la corrupción e impunidad” (OSAL 2002) y su lucha se encolumna contra el neoliberalismo como principal premisa.

Con la llegada de Fernando Lugo (2008-2012), el primer presidente que accede al poder con el apoyo de movimientos sociales, sindicatos y el campesinado, se suspenden seis décadas de gobierno del Partido Colorado.<sup>3</sup> Así, la Alianza

---

<sup>2</sup> Ley General de Reorganización y Transformación de Entidades Públicas Descentralizadas y de Reforma y Modernización de Organismos de la Administración Central.

<sup>3</sup> En cuanto al apoyo del sector campesino a la coalición de gobierno, podemos argumentar que su posición no fue homogénea ni se encontraron ausentes las tensiones internas. Como argumentan Palau y Ortega (2008) y Escobar Martínez (2013), pudieron identificarse cuatro posiciones en este sector. En la primera de ellas, ponderó el amparo institucional; explicitando su apoyo durante la campaña electoral al tiempo que parte de sus integrantes formaron las listas de candidatos. En segundo lugar, se vio un apoyo de la dirigencia, pero inhibiendo el respaldo de las organizaciones como tal. En esta posición se puede ubicar a la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica y la Coordinadora de organizaciones de los Bañados. En tercer lugar, se encuentran aquellas que no tomaron posición, como el Consejo Nacional de Organizaciones Populares - Movimientos Sin Techo



Patriótica para el Cambio (APC) está conformada por una coalición de movimientos sociales y campesinos, sectores del sindicalismo, partidos de izquierda y el tradicional Partido Liberal (PLRA).<sup>4</sup> El 20 de marzo de 2010 se conforma la concertación denominada Frente Guasú que responde directamente a la figura de Fernando Lugo y muestra el máximo grado de unificación de la izquierda paraguaya (Bozzolasco 2019).

La constitución social de este nuevo colectivo político da cuerpo a un programa que reivindica las propuestas históricas de los sectores progresistas de la sociedad paraguaya y, en gran medida, la agenda regional del ciclo populista-progresista: reactivación e intervención en la economía; combate de la corrupción; independencia del Poder Judicial; recuperación la soberanía nacional y un proyecto redistributivo en términos progresivo. Pero la propuesta más radical y que se traduce en el encolumnamiento tácito o expreso del campo progresista y popular en la APC es la posibilidad histórica de concretar, finalmente, la reforma agraria. En un contexto signado por la efervescencia social y el aumento de las medidas de acción directa por parte del campo popular, especialmente del campesinado, surge una figura cuyo uso va a ser central para habilitar la persecución de líderes de base y para delimitar la capacidad de acción de los movimientos sociales en la etapa posterior: el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).

En 2012, la Masacre de Curuguaty habilita la destitución de Fernando Lugo mediante un juicio político *express*. El *outsider* Horacio Carte, quien propone la restauración del modelo neoliberal, es electo presidente el 2013. Su gobierno se presenta como “modelo de reestructuración integral del capitalismo paraguayo, para integrar el país y su alta burguesía empresarial al sistema económico mundial transnacional en desarrollo” (Lachi 2015, 248).

La ley de Alianza Público-Privada (APP, art. 52 Ley N° 5102/2013) se convierte en el “dispositivo ejemplar del modelo empresarial de desarrollo” propuesto por Cartes (Escobar 2015, 28). En el artículo 52, la ley establece que la iniciativa privada puede hacerse cargo de los servicios de energía eléctrica, del agua potable, del alcantarillado sanitario, de las plantas de tratamiento de efluentes, del transporte ferroviario, del transporte carretero, de los aeropuertos, de las hidrovías (su dragado) y de los puertos fluviales, entre otros. Este instrumento favorece a las grandes empresas extranjeras y a las empresas nacionales que se alían a aquellas,

---

CONOP-MST. Por último, aquellas que tuvieron un rol opositor, como la Federación Nacional Campesina (FNC) que llamó a la abstención, a modo de crítica al “electoralismo”.

<sup>4</sup> La APC, con la fórmula Lugo-Franco, se erigió como la principal alternativa frente a las candidaturas de Blanca Ovelar por el Partido Colorado, Lino Oviedo por UNACE y el empresario Pedro Fadul por Patria Querida. La APC logró imponerse con el 40,90% en las elecciones presidenciales del 20 de abril de 2008.

puesto que prevé la movilización de recursos públicos y privados para obras de infraestructura, para lo cual únicamente podrán concurrir empresas de infraestructura con gran capacidad financiera.

La política neoliberal de Horacio Cartes vuelve a colocar en la agenda de las organizaciones sociales la necesidad de la lucha conjunta contra lo que el campo popular interpreta como políticas de saqueo y la conformación del CDP vuelve a ser impulsado por muchas de ellas (Palau 2014). En efecto, el movimiento campesino, parte del arco sindical, el movimiento estudiantil, otras organizaciones sociales y partidos políticos forjaron un programa de acción conjunta que tuvieron su epicentro en la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2014, cuando se plantearon los principales ejes de articulación y se postulaba la renovación de la plataforma CDP para comienzos del año 2015.

La crisis del modelo neoliberal, con sus consecuentes debacles económicas y aumento del conflicto social representado por los movimientos sociales latinoamericanos, también tiene un escenario privilegiado en Brasil. En 2003, con la llegada de Lula Da Silva al poder se inicia el denominado ciclo “progresista-populista” (Soler 2020). En 2011, ocho años después del comienzo de los gobiernos del Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma Rousseff, ex-ministra de Minería y Energías de Lula, es elegida presidenta del país. Como destaca Anderson (2019), desde sus inicios, el nuevo gobierno es presionado por sectores de la élite financiera que acompañan una serie de medidas de recorte del gasto público. En 2013, el ministro de Hacienda decide aumentar la tasa de interés y reducir el gasto público generando graves problemas económicos. Con la decisión de aumentar las tarifas de transporte público, la oposición política y sectores de la clase media comienzan un nuevo ciclo de protestas en las calles. Al fenómeno, se acopla el ascenso de una nueva derecha montada en la ola de movilizaciones.

El ciclo de protestas contra el gobierno *petista* que comienza en 2013 es caracterizado desde una perspectiva multicausal e histórica. En palabras de Bringel (2017), las movilizaciones de 2013 abren un nuevo ciclo político en el país. Su hipótesis radica en que la apertura sociopolítica de los gobiernos de Lula y Dilma posibilitan la expansión de las movilizaciones de individuos y colectivos tanto por izquierda como por derecha. El ciclo de protestas de los años 2013-2015 se caracteriza por la participación de actores sociales tradicionales—sindicatos y organizaciones territoriales—como también nuevos; las clases medias urbanas (Natalucci y Ferrero 2021). Al respecto, los autores mencionan que la configuración de estos viejos y nuevos actores en la protesta social es producto del creciente

distanciamiento entre el PT y la izquierda tradicional y en este sentido, adoptan una postura autónoma o antagonista con el partido de gobierno.

Según Zibechi (2016), la ola de protestas constituye un tsunami cultural y político sin el cual no es posible comprender el *impeachment* a Dilma Rousseff y el posterior ascenso de las derechas. En efecto, a diferencia de los golpes de Estado de las décadas de 1960 y 1970, en que las Fuerzas Armadas tuvieron un rol central bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, en los golpes de Estado del siglo XXI los actores provienen principalmente desde la sociedad civil y se valen de instrumentos legales como principal mecanismo destituyente. La masificación de la protesta social durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff y el posterior *impeachment* culmina en la capitalización de las fuerzas de derecha. Bringel (2016) destaca que durante este ciclo se profundiza la polarización política y social del país, que tuvo impactos en lo político institucional y electoral.

Anderson (2019) destaca que los movimientos de derecha *Vem Pra Rua* y *Brasil livre* lograron captar el descontento social y el agotamiento del gobierno de Rousseff a partir de un manejo excepcional de las redes sociales, logrando captar—por derecha e izquierda—simpatizantes a través del uso intensivo de internet.

Consumado el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, el 31 de agosto de 2016, asume las tareas ejecutivas el vicepresidente Michel Temer, líder del Movimiento Democrático Brasileiro (MDB) con bajos niveles de aceptación y legitimidad. Entre las primeras medidas tomadas por Temer, se destacan la eliminación y fusión de ministerios (Mujeres, Cultura, Desarrollo Agrario, Igualdad Racial y Derechos Humanos); el achicamiento del Estado en materia económica (particularmente el desfinanciamiento de programas sociales); la reforma laboral y aumento de la edad jubilatoria; y la promoción de las inversiones extranjeras privadas.

Desarticulada la capacidad de movilización en las calles del PT y acabada su hegemonía política, la justicia brasileña encarnada en el Juez Sergio Moro y el Tribunal Superior Electoral, llevan adelante la detención de Lula Da Silva con el objeto de impedir su candidatura presidencial en las elecciones de 2018. Apartado de la escena electoral el principal candidato, y con el apoyo de sectores ligados a los grandes empresarios agrícola-ganaderos, sectores conservadores de la Iglesia Evangélica y una serie de partidos regionales, obtiene la victoria en las elecciones presidenciales de 2018 el ex capitán del Ejército, Jair Bolsonaro. El presidente electo logra capitalizar las movilizaciones sociales de la clase media y el rechazo al PT—y al propio sistema político—que venían tomando fuerza desde 2013 (Rocca Rivarola 2020). En palabras de Salas Oroño (2017), esto permite la conformación de una

“clase política golpista” en el Parlamento integrada por diputados del MDB y de otros partidos y al mismo tiempo, impulsa una discursividad racista, homofóbica y autoritaria.

A diferencia de Paraguay y de Brasil, que han experimentado gobiernos alineados con el ciclo populista-progresista en la región, Colombia representa un caso de continuidad de la hegemonía neoliberal, que había sido institucionalizada por la Constitución sancionada en 1991 (Mercado 2017). El ascenso de Álvaro Uribe Vélez en 2002 y sus dos mandatos consecutivos (2002-2006 y 2006-2010) están marcados por su Política de Defensa y Seguridad Democrática, bajo la cual se transforma a las FARC en el *gran enemigo* de Colombia (Rodríguez 2018). La profundización del neoliberalismo durante los años de Uribe se evidencia en la suscripción de Colombia a distintos Tratados de Libre Comercio (TLC) en 2006, 2007 y 2008. Estos elementos comienzan a confluir en una reactivación de la protesta social.

En este contexto, el movimiento estudiantil colombiano atraviesa un proceso de recomposición que, desde una mirada de mediana duración, había comenzado hacia fines de la década de 1990. En la época de Uribe se suman los reclamos contra la reforma constitucional que habilitaba su reelección y la incorporación de Colombia a los TLC mencionados. Ante el incremento de las protestas, la respuesta gubernamental de Uribe es, a partir de 2008, autorizar a las fuerzas policiales a ingresar a los predios universitarios sin la necesidad de contar con el consentimiento de las autoridades (Archila 2012, 90).

En su papel de ministro de Defensa del gabinete de Uribe entre 2006 y 2009, Manuel Santos es implicado en las denuncias sobre los casos de “falsos positivos” que le atribuían la responsabilidad política sobre los hechos. Además, como candidato a la presidencia su campaña electoral estuvo orientada en torno a la continuidad de la línea política de Uribe, de quien se decía su sucesor. Ya como presidente electo, Santos manifiesta lo que es el principal punto de desacuerdo respecto de su antecesor—y líder político—sobre el abordaje del conflicto armado. De este modo se inician nuevamente los acercamientos del gobierno con las guerrillas, en lo que abre un nuevo proceso de diálogo y negociación para lograr un pacto de paz con las FARC-EP. Un punto en el que sí se observa una línea de continuidad entre Uribe y Santos es en la obediencia a las fórmulas neoliberales pautadas por los organismos financieros internacionales. El período de Santos sostiene la política económica de corte neoliberal de su antecesor, mientras que, a diferencia de este, apuesta por la pacificación del territorio nacional con el fin de

ampliar los márgenes de las actividades económicas orientadas al sector externo en regiones que se encontraban sumidas en el conflicto armado.

Durante el gobierno de Santos la movilización social sufre transformaciones a partir de las cuales se legitima como forma de participación política. En este sentido, entre 2010 y 2018 hay un incremento de las manifestaciones y una diversidad en torno a las demandas que las movilizan, lo que Cepeda identifica como “cambios en la estructura de oportunidad política, fruto del proceso de paz” con la guerrilla de las FARC (2018, 38). En estos años, las agendas de protesta se enfocan en la educación, los derechos laborales, el medio ambiente, la defensa del campo, los derechos humanos, indígenas y la paz (Cepeda 2018, 38).

El nuevo ciclo de protestas en Colombia se inicia, entonces, en 2011 con distintas movilizaciones estudiantiles del sector universitario en contra de la reforma de la Ley 30 de Educación Superior. Esta ley implicaba una mayor mercantilización en el acceso a la educación universitaria. En este momento se forma la Mesa Amplia Nacional de Educación (MANE) con el objetivo de bloquear dicha reforma (Cepeda 2018, 39), lo que constituye un antecedente directo de los dos exponentes del movimiento estudiantil que trabajamos en este proyecto de investigación: la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), formada en 2015 durante el segundo mandato presidencial de Santos, y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES), creada posteriormente, en 2018.

En términos internos al movimiento estudiantil, la reforma regresiva de la Ley de Educación Superior propuesta por el gobierno de Santos fue el aglutinante para que las organizaciones nacionales y regionales, representantes de universidades y de institutos públicos y privados, dejarán de lado sus diferencias en torno a lograr la unidad frente al gobierno (Archila 2012, 92-93). Por otro lado, en esta coyuntura el movimiento amplía sus márgenes de acción, logrando movilizaciones nacionales semanales que convocaban no solo a estudiantes y profesores, sino también a la ciudadanía en general. Además, el movimiento participa en debates parlamentarios y “construyó alianzas con fuerzas partidistas críticas al proyecto de reforma oficial” (Archila 2012, 94), logrando el retiro del proyecto en noviembre de 2011. Al ciclo de movilización abierto a partir de 2011 por transportistas y estudiantes se suman las movilizaciones encabezadas por campesinos—movilizados en 2013 contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos—“indígenas, maestros, organizaciones de víctimas y cultivadores de hoja de coca de algunas regiones del país, entre otros” (Cepeda 2018, 39-40). A ello se agregan, en 2016, manifestaciones

a favor de la firma del Acuerdo de Paz, que cuentan con sectores de la población que no participaban habitualmente de este tipo de protestas.

Frente a las medidas tomadas por Santos, la derecha liderada por Uribe profundiza la polarización política apelando a formar un “frente contra el terrorismo” y calificando al acuerdo como un desvío del gobierno hacia la impunidad, tal como muestra Rodríguez (2014, 94). Este sector se cristaliza en un nuevo partido político que nace en 2013 bajo el nombre de Centro Democrático, compuesto por alas del uribismo y del Partido Conservador. Al respecto, Ávila Martínez y Morales Pérez plantean que en este espacio político se aglutinan “las caras representativas de esa nueva derecha colombiana” (2021, 10). A partir de 2018, con el triunfo electoral de Iván Duque, se transforma en el partido de gobierno, obteniendo además la mayoría en el Senado.

En lo que refiere a la protesta social, a partir de 2018 presenta un nuevo giro que Cepeda establece como “una gran incompreensión de la movilización social por parte del recién electo gobierno de Iván Duque [...] criminalizando la protesta social y estigmatizando grupos como los estudiantes” (2018, 41). Quienes protagonizan la protesta desde el movimiento estudiantil confirman estos virajes a partir de la llegada de Duque. En este sentido, identifican cambios en la reacción gubernamental ante la protesta, pasando de instancias de diálogo y negociación en los primeros meses de mandato en 2018, a la profundización de la represión y la criminalización a partir de 2019 y acentuada en 2021.

A continuación, reconstruiremos el nuevo ciclo de protesta protagonizado por el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), por *#EleNão* y por la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) durante los gobiernos de Horacio Cartes, Jair Bolsonaro e Iván Duque, respectivamente. Nos centraremos en el análisis de sus demandas, de su composición social y de sus repertorios de acción.

#### *Composición social, demandas y repertorios de acción durante el nuevo ciclo de acción colectiva*

En Paraguay, hacia mediados de la década de 2010, el reclamo por las privatizaciones y contra el neoliberalismo vuelve a ser el epicentro de los descontentos y el motivo que permite coagular la acción de trabajadores, campesinos y excluidos, generando mayor visibilidad y potencia a las fuerzas de resistencia. En este sentido, la acumulación de luchas previas y la experiencia histórica concebida por el campo popular se ve cristalizada el 28 de febrero de 2015 cuando el CDP se constituye nuevamente como “Herramienta de lucha y unidad

de sectores democráticos, patrióticos y combativos, contra la política del Gobierno antinacional y antipopular de Cartes”.<sup>5</sup> El CDP es relanzado a partir de una heterogénea composición social que se traduce, en la etapa constitutiva, en un programa amplio de lucha que logra interpelar a gran parte del arco movimientista y progresista del país. Ello deriva en la elaboración de una consigna donde las demandas no satisfechas de gran parte de la sociedad se articulan en torno a un mismo significante: la lucha contra el neoliberalismo. En marzo del 2015 el CDP lanza su primer manifiesto: “contra las privatizaciones y la violencia del Estado”.

Los repertorios de acción también muestran vocación de comulgar en un mismo movimiento distintas tradiciones y trayectorias organizativas. Mientras que se ponen en funcionamiento lógicas más tradicionales de intervención propias del arco político-partidario (como las reuniones, congresos y mítines) se articulan otras de carácter más disruptivo (serenatas, obras de teatro y performance en el espacio público) especialmente traccionadas por el colectivo de mujeres, con aquellas más ligadas a las luchas campesinas (manifestaciones, acampes), sindicales (huelgas y paro cívico) y de organizaciones sociales (es el caso de los escraches).

Aun así, la unidad no está exenta de tensiones internas y en el plazo de un año parte importante de la plataforma se desmembró, mostrando las limitaciones del discurso antineoliberal como articulador de la lucha. El desencuentro entre el Frente *Guasú* y el sindicalismo organizado en la CUT-A dan muestra de esto. Mientras que la organización de trabajadores denunciaba las intenciones electoralistas del Frente *Guasú* en una coyuntura signada por las elecciones municipales, el partido y varios miembros del CDP afirmaba que el sindicalismo se había convertido en una fuerza sin capacidad de incidencia y que había sido cooptada por el gobierno de Cartes.<sup>6</sup> El alejamiento del Frente *Guasú* deja en evidencia las tensiones existentes en el seno del Congreso y las limitaciones de la lógica partidaria para someterse al grado de radicalidad que presentan los movimientos de base. Esto puede verse con mayor nitidez en las elecciones generales de 2018. En esa ocasión, el CDP presenta un programa anti-electoralista y un plan de lucha denominado *Poder Popular* en el que se pide la renuncia de Horacio Cartes y toda su línea sucesoria.

---

<sup>5</sup> Congreso Democrático del Pueblo (febrero 2015). Información. [Página de Facebook]. <https://www.facebook.com/congresodemocraticodelpueblo/>

<sup>6</sup> Sectores de izquierda oficializan plataforma anti-cartista (01/03/2015). Última Hora. <https://www.ultimahora.com/sectores-izquierda-oficializan-plataforma-anti-cartista-n876569.html>

Sin embargo, la demanda contra la Masacre de Curuguaty<sup>7</sup> y las irregularidades en el proceso de juzgamiento de 11 campesinos por el hecho es un punto de inflexión en la lucha conjunta del arco progresista y de la unidad de los movimientos sociales. Los jueces determinaron que los 11 procesados eran culpables de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Asimismo, encontraron culpables de homicidio doloso consumado y en grado de tentativa a 9 de ellos. Se establecieron condenas que oscilaron de los 4 a los 30 años de prisión. Este hecho, y una lucha que no tuvo su correlato en políticas concretas, culmina en el desgaste del CDP que, hacia fines de 2016, pierde de eje sus dos consignas aglutinantes: la lucha por la APP y Curuguaty. Sus últimas intervenciones están centradas en discusiones en torno al sistema electoral para desaparecer completamente en el año 2019, cuando presenta una capacidad de concentración mínima y una territorialización casi inexistente. En la actualidad se encuentra desactivado.

En Brasil, a partir del ciclo de protestas que comienza en 2013 durante el gobierno de Dilma Rousseff, toman mayor presencia pública las demandas que pueden ser englobadas como “liberal-punitivas”: reducción de impuestos, reclamos por mano dura de las fuerzas de seguridad, descontento ante la ampliación de derechos sociales y económicos por parte de las élites y sectores concentrados de la economía. En este marco de expansión de movimientos y acciones de protesta, se da el ascenso al poder de las derechas en el gobierno. Con la candidatura de Jair Bolsonaro y las posibilidades ciertas de que alcanzara el poder, sectores urbanos y rurales progresistas se ponen en alerta. El ciclo de movilizaciones comienza meses antes, con la presencia de mujeres negras, trabajadoras y *faveladas* en las calles de las grandes ciudades del litoral atlántico. Durante 2017, el país había registrado 4473 femicidios, la mayoría de ellas (70%) mujeres negras sin acceso a la educación formal (Gentili 2018).

El punto más álgido de las movilizaciones ocurre luego del 14 de marzo de 2018, día en que es asesinada la militante política y por los derechos sexuales y reproductivos y de los afrodescendientes, Marielle Franco. La parlamentaria carioca pertenecía al Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y en los años previos había tenido un rol central en la denuncia de los abusos policiales y la intervención militar de Río de Janeiro. En este contexto, durante la campaña electoral que lleva a Jair

---

<sup>7</sup> La masacre de Curuguaty tuvo lugar el 15 de junio de 2012 en Campos Morumbi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú, al norte de Paraguay. Se trató de un enfrentamiento entre campesinos y personal del Grupo Especial Operaciones de la Policía Nacional del Paraguay, a partir de la orden de desalojo ordenado por el ministro del Interior. Murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías), más de 80 heridos y 60 detenidos.



Bolsonaro a la presidencia comienza a tomar forma el movimiento *#EleNão*, nutrido principalmente por negros y negras, mujeres y disidencias sexuales, que ven amenazados sus derechos ante el discurso homofóbico y racista del candidato del Partido Social Liberal (PSL), apoyado por sectores conservadores de la sociedad y la Iglesia Evangélica. En los orígenes de las acciones de protesta del Movimiento, además de la presencia mayoritaria de mujeres, se encuentran grupos y actores sociales tradicionales, como el Movimiento de lxs Trabajadorxs sin Tierra (MST), el Movimiento de las Presas Afectadas (MAB), el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), organizaciones LGBTIQ+ y disidencias sexuales y otras organizaciones de la sociedad civil.

*#EleNão* comienza como un grupo privado de la red social Facebook llamado Mulheres Unidas Contra Bolsonaro (MUCB) que en 2021 contaba con más de 2 millones y medio de *likes* y luego se viraliza a través de servicios de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram y constituye un espacio de canalización de las demandas de la sociedad civil brasileña ante las políticas de Bolsonaro.<sup>8</sup> Sin embargo, no puede traducir su peso al campo político-electoral. Una de las particularidades del movimiento es que sus expresiones alcanzan gran difusión a través de las redes sociales. Como relata uno de los informantes clave de la investigación, el acceso a la información en los sectores populares y de clase media se da principalmente a través de la mensajería instantánea y las listas de difusión (mecanismo utilizado también para la difusión de información falsa que abonó a la candidatura de Jair Bolsonaro).

En marzo de 2020 con la declaración de la pandemia por COVID-19, las lógicas de la protesta social y las movilizaciones callejeras debieron mutar. En este marco, el gobierno de Jair Bolsonaro fue reticente a la aplicación de medidas sanitarias y humanitarias para evitar la expansión del virus. Brasil es uno de los países de la región que menos medidas tomó para detener la propagación del COVID-19; las actividades económicas no tuvieron limitaciones y las fronteras continuaron parcialmente abiertas (OBLAT, 2020).

Frente al aislamiento social, el movimiento robustecer utilizó estrategias digitales para involucrarse en el campo político, lo que Toret (2013) denomina “tecnopolítica”. Además, estas herramientas le permiten reconfigurarse en el campo de la acción colectiva de una manera innovadora. Al mismo tiempo, las redes sociales permiten *#EleNão* llegar a otros puntos de América Latina y tejer redes con movimientos de mujeres y disidencias en otros países de la región. La *Campaña latina*

---

<sup>8</sup> “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” (septiembre 2021). Información. [Página de Facebook]. <https://www.facebook.com/groups/grupomucb/>

lanzada por el movimiento de mujeres brasileño a través de *Midia Ninja* logra articular y promover la participación de mujeres en las campañas electorales de Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia durante 2020 y 2021.<sup>9</sup>

En el caso de Colombia, los referentes empíricos del movimiento estudiantil seleccionados para esta investigación son organizaciones de formación reciente, aunque dan cuenta de la larga tradición de lucha que mencionamos en el apartado anterior. La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) surgió en 2015 con el objetivo de defender la educación superior pública, buscando nuclear al sector representativo estudiantil de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de Colombia. Mientras que la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES) se forma en 2018 con el propósito de alzarse contra el continuo desfinanciamiento del sistema educativo, en el momento en el que el Congreso Nacional anuncia el Presupuesto General de la Nación,<sup>10</sup> y con los objetivos de defender la educación pública, gratuita y de calidad, y articular la lucha del ámbito público y privado mediante la conformación de una plataforma nacional<sup>11</sup> que incluya a los institutos técnicos, tecnológicos y universitarios.<sup>12</sup>

Con la asunción de Iván Duque al poder en 2018, la protesta social entra en un paréntesis que se puede interpretar como un período de evaluación por parte de los movimientos, en el que se analizan las nuevas políticas del nuevo gobierno y, en función de ellas, se definen los programas de acción a seguir. El movimiento estudiantil es una excepción en este sentido ya que apenas asumido Duque, en el mes de octubre, inicia un paro nacional universitario que dura dos meses y es expresión de la demanda histórica relacionada con la crisis presupuestaria del sistema educativo.

Los sectores que impulsan esta medida contra del gobierno nacional se articulan en el Frente Amplio por la Educación Superior, que aglutina a organizaciones estudiantiles como ACREES y UNEES, así como también a agrupaciones de docentes. Desde UNEES establecen que la mirada estratégica del momento de la convocatoria de aquel paro estaba enfocada en el presupuesto para

---

<sup>9</sup> Campanha latina. (septiembre 2021). Información. [Página web de la organización]. <https://campanhademulher.org/campanha-latina/>

<sup>10</sup> UNEES Colombia [@UNEESCol]. (09/10/2018). Declaración Política del I Encuentro Nacional de Delegados/as de la UNEES. [X ex-Twitter] <https://x.com/uneescol/status/1049512314427400194?s=21>

<sup>11</sup> UNEES Colombia [@unees.col]. (14/02/2019). Por nuestros líderes y lideresas sociales... [Instagram]. <https://www.instagram.com/p/Bt3V1tzg71C/?igshid=1qggs01lm251w>

<sup>12</sup> Claves para entender el movimiento estudiantil (16/01/2019). *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/educacion/claves-para-entender-el-movimiento-estudiantil-article-834347/>

2019, dado que se encontraban en “un punto de inflexión en ese momento: para el 2019 las universidades públicas en Colombia no tenían con que funcionar [...] Llegamos a ese punto de inflexión de ¿qué va a pasar? O nos organizamos este año o en el 2019 no hay con qué funcionar” (Entrevistada, UNEES). Así, el movimiento estudiantil es el sector que tempranamente se erige contra el gobierno de Duque, quien en ese entonces convoca al diálogo y en diciembre de 2019 logra desactivar momentáneamente la protesta luego de la firma de un acuerdo de compromiso donde se reconoce algunos de los puntos de protesta.

Respecto de las demandas del movimiento estudiantil desde 2018, hay confluencia entre la ACREES y la UNEES. Desde ambas organizaciones coinciden en que la agenda de protesta no se limita a las problemáticas puntuales de la educación, sino que los diagnósticos que trazan son amplios y abarcan temáticas estructurales acerca de la necesidad de cambios de fondo en la estructura social y política de Colombia. De igual forma, esbozan demandas puntuales referidas al recrudecimiento de la represión desde el retorno del uribismo al poder.

En lo relativo a la posibilidad de ampliar la participación del movimiento estudiantil hacia objetivos electorales o bien habilitar puntos de contacto con partidos políticos, observamos diferencias entre ambas organizaciones. Mientras que esta organización registra un descreimiento en la posibilidad de transformar las demandas del movimiento estudiantil en programas político-partidarios o de articular directamente con espacios políticos institucionalizados, desde ACREES muestran menos escepticismo sobre la participación política-partidaria. Si bien desde ACREES plantean la necesidad de trasponer las lógicas del movimiento social a la contienda electoral, muestran reparos en “suscribir a un movimiento político particular también es un error porque eso no permite que sea amplio, que pueda vincular a toda la gente que coincida en todas sus banderas reivindicativas” (Entrevistada, ACREES).

A pesar de las diferencias sobre la construcción de los consensos internos, el movimiento estudiantil valora las alianzas programáticas que se pueden entablar con estos otros movimientos en coyunturas como la del paro nacional de 2019. Incluso se destaca la voluntad de establecer alianzas con movimientos cuyas dinámicas de protesta y lógicas de participación no son del todo compartidas ni similares a las del movimiento estudiantil.

*Principales emergentes y conclusiones de la investigación*

Como se ha advertido, los movimientos sociales latinoamericanos y su acción colectiva como objetos de análisis se constituyen al calor de los procesos sociales y políticos, adquiriendo formas y dinámicas específicas que se han visto modificadas por la pandemia de COVID-19. A través del análisis sociohistórico y comparado de actores concretos en coyunturas específicas hemos podido indagar en el desarrollo de un ciclo de movilización. Para ello hemos desarrollado una estrategia metodológica comparativa y utilizado diversas fuentes con el objetivo de articular un estudio con un robusto sustento empírico y una perspectiva conceptual sólida.

La revitalización de los ciclos de protesta social en los casos analizados muestra características similares: a) composición social heterogénea; b) la ocupación del espacio público a partir de las manifestaciones callejeras y c) nuevas expresiones a través de canales digitales en el marco de la pandemia por COVID-19. También, revitalizan una narrativa antineoliberal conjugada con un discurso identitario y, finalmente, articulan orgánicamente componentes urbanos y rurales.

Tras el estudio empírico de los casos abordados hemos observado que las características asumidas por este fenómeno responden a condicionantes sociohistóricos propios de los procesos políticos y sociales en cada país. En Paraguay, la transición democrática iniciada en 1989 tiene como principales agentes del cambio social a los movimientos sociales organizados y unificados, lo que pudo evidenciarse en la constitución del CDP en 2002 y en la capacidad para frenar el proceso de privatizaciones durante el período neoliberal. Posteriormente, los sectores subalternos organizados en distintos movimientos de la sociedad civil vieron sus demandas cristalizadas en la plataforma electoral que llevó a Fernando Lugo al gobierno en 2008. Ello se traduce en una revitalización de la lucha y en una creciente efervescencia social. Sin embargo, el golpe de estado de 2012 reedita el proyecto neoliberal y tras la victoria de Horacio Cartes en 2013 se inicia un proceso de liberalización y desregulación de la economía que se plasma en la promulgación de la APP y en la reforma de la Ley de Seguridad Interna para asegurar su aplicación. La principal consecuencia es la reunificación del campo popular y la constitución de un nuevo CDP conformado por gran parte de los movimientos sociales paraguayos.

En Brasil, a diferencia del caso paraguayo, el ciclo de protesta iniciado en 2013 se diferencia de las movilizaciones experimentadas en el proceso de redemocratización tras la dictadura (1984-1985). Durante este período, la articulación de viejos y nuevos actores es producto del creciente distanciamiento

con el PT y la izquierda tradicional, por lo que toma un carácter autónomo o antagonista del partido de gobierno. Un dato novedoso es que a la participación de actores sociales tradicionales (sindicatos y organizaciones territoriales) se incorporan las clases medias urbanas. En 2016—tras el *impeachment* a Dilma Rousseff, el fallido gobierno de Michelle Temer y la proscripción de Lula Da Silva—obtiene la victoria el ex capitán del Ejército, Jair Bolsonaro, quien contaba con el apoyo de sectores ligados a los grandes empresarios agrícola-ganaderos, sectores conservadores de la Iglesia Evangélica y una serie de partidos regionales. El presidente electo logra capitalizar las movilizaciones sociales de la clase media y el rechazo al PT y al sistema de partidos en general y constituye su poder a partir de la producción de “enemigos” que le permitieron reforzar su identidad, forjando un discurso homofóbico, xenófobo y contra los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Asimismo, lleva a cabo políticas económicas y sociales excluyentes y represivas. Como consecuencia, puede observarse una consolidación de la acción colectiva protagonizada por el movimiento de mujeres, los movimientos sociales urbanos de estudiantes y rurales ligados a expresiones de izquierda.

Si bien en Colombia se experimenta una continuidad de la hegemonía neoliberal, los ciclos de protestas no están exentos de transformaciones. El ascenso de Álvaro Uribe Vélez en 2002 está marcado por su Política de Defensa y Seguridad Democrática, bajo la cual se transforma a las FARC en el “gran enemigo” de Colombia. Esta narrativa le permite la profundización de las políticas neoliberalismo, lo que comienza a confluir en una reactivación de la protesta social. En este contexto, el movimiento estudiantil colombiano atraviesa un proceso de recomposición. Con la llegada de Manuel Santos al gobierno se mantiene la política económica neoliberal, pero existe un redireccionamiento en torno a la política sobre las FARC. En este contexto, la movilización social sufre transformaciones a partir de las cuales se legitima como forma de participación política. Entre 2010 y 2018, producto del inicio de las negociaciones del acuerdo de paz, se experimenta un incremento de las manifestaciones y una diversidad en torno a las demandas que las movilizan: educación, los derechos laborales, el medio ambiente, la defensa del campo, los derechos humanos, indígenas y la paz. La reforma regresiva de la ley de Educación Superior propuesta por el gobierno funge de plataforma para que el movimiento estudiantil amplíe sus márgenes de acción, logrando movilizaciones nacionales que convocaban no solo a estudiantes y profesores, sino también a la ciudadanía en general. Finalmente, con el ascenso de Iván Duque, alineado al

uribismo, se promueve la regulación de la protesta social y la judicialización de los manifestantes, lo que inicia un nuevo ciclo de movilización.

En cuanto al análisis de la composición social, de las demandas y de los repertorios de acción del Congreso Democrático del Pueblo (CDP), de #EleNãO, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) y de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) durante los gobiernos de Horacio Cartes, Jair Bolsonaro e Iván Duque pudimos dar cuenta de sus rasgos comunes al tiempo que nos centramos en sus diferencias.

En Paraguay, durante el año 2015, el reclamo por las privatizaciones, contra el neoliberalismo y la violencia estatal vuelve a ser el epicentro de las protestas, generando mayor visibilidad y potencia a las fuerzas de resistencia. La reedición del CDP es expresión de ello. El espacio se presenta como un punto de convergencia conformado por sindicatos, organizaciones sociales, movimientos sociales, de mujeres, movimiento campesino y partidos políticos. Esta heterogénea composición social se traduce, en la etapa constitutiva, en un programa amplio de lucha que lograba interpelar a gran parte del arco movimientista y progresista del país y en una multiplicidad de repertorios de acción. Hemos podido demostrar que la unidad expuesta en el CDP no está exenta de tensiones internas, mostrando las limitaciones del discurso antineoliberal como articulador de la lucha.

En una segunda etapa, la demanda contra la Masacre de Curuguaty se erige como un punto de inflexión en la acción conjunta del arco progresista y de la unidad de los movimientos sociales. A partir de esta premisa, el accionar del Congreso sufre una revitalización que rebasa los márgenes de acción hasta el momento experimentados por la plataforma. En efecto, la Masacre de Curuguaty como bandera logra articular sin mayores problemas las líneas internas del movimiento y posibilita ampliar el espacio de convergencia crecientemente disminuido desde su conformación. Sin embargo, esta efervescencia de la lucha conjunta no se ve reflejada en la condena atribuida a los campesinos, lo que culmina en la erosión del CDP que, hacia fines de 2016, pierde de eje sus dos consignas aglutinantes.

Si el nuevo ciclo de movilización en Paraguay mantiene varios elementos del ciclo de protesta previo (nos referimos a composición, canales de comunicación, repertorios de acción y demandas), el caso brasileño muestra una importante diferencia en este sentido, especialmente a partir de las nuevas formas de manifestación y nuevos canales de comunicación, así como en la expresión de consignas con un componente fuertemente identitario.

A partir del ciclo de protestas que se inicia en 2013 durante el gobierno de Dilma Rousseff, toman mayor presencia pública las demandas que pueden ser englobadas como liberal-punitivas, las que conviven con las demandas de movimientos sociales rurales y urbanos, indígenas, estudiantes y de género que se suman a una plataforma que continúa reclamando la ampliación de derechos y protección del medio ambiente. Dos movimientos son de importancia durante este contexto de expansión de las acciones de protesta. Por un lado, durante la campaña electoral que lleva a Jair Bolsonaro a la presidencia, comienza a tomar forma el movimiento *#EleNão*, constituido principalmente por negros y negras, mujeres y disidencias sexuales, que ven amenazados sus derechos ante el discurso homofóbico y racista del candidato del Partido Social Liberal (PSL), apoyado por sectores conservadores de la sociedad y la Iglesia Evangélica. En los orígenes de las acciones de protesta del movimiento, además de la presencia mayoritaria de mujeres, se encuentran grupos y actores sociales tradicionales. Si bien este movimiento tiene un rol central en las manifestaciones públicas y acciones de protesta en las calles de las grandes ciudades de Brasil, su origen se remonta a las redes sociales. *#EleNão* se gesta en un contexto sanitario ocasionado a partir del COVID-19, a través de las redes sociales, generando materiales para difusión, entrevistas, charlas, festivales y otros recursos que permiten su circulación masiva a través de las redes sociales y la mensajería instantánea.

En el caso colombiano, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) surge en 2015 con el objetivo de defender la educación superior pública, buscando nuclear al sector representativo estudiantil de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de Colombia. A su vez, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES) se forma en 2018 con el propósito de alzarse contra el continuo desfinanciamiento del sistema educativo—cuando el Congreso Nacional anunciaba el Presupuesto General de la Nación—y con los objetivos de defender la educación pública, gratuita y de calidad, y articular la lucha del ámbito público y privado mediante la conformación de una plataforma nacional que incluya a los institutos técnicos, tecnológicos y universitarios.

El paro nacional universitario de 2018 aglutina a ambas organizaciones y habilita la constitución de una agenda de protesta que no se limita a las problemáticas puntuales de la educación. A partir de allí, los diagnósticos que trazan son amplios y abarcan temáticas estructurales de fondo, evidenciando un nuevo ciclo de protesta que revitaliza las narrativas antineoliberales y que adquiere características específicas vinculadas con la represión de la protesta por parte del

Estado, herramienta que había entrado en un paréntesis bajo el mandato de Santos y la firma del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, el principal punto de divergencia se da en torno a la posibilidad de transformar las demandas del movimiento estudiantil en programas político-partidarios o de articular directamente con espacios políticos institucionalizados. Por otro lado, se percibe una construcción de consensos y de repertorios de acción que se distancia de los promovidos por movimientos sociales tradicionales, como los sindicatos. En este sentido, asocian el principio de horizontalidad como una herramienta para la construcción de consensos en torno a las demandas y estrategias.

Para culminar, queda indagar en diversos aspectos de este nuevo ciclo de acción colectiva. En el análisis propuesto, se enfatiza en el carácter de las demandas, en la composición social y en los repertorios de acción. Resta investigar en los niveles de institucionalización de estos movimientos o en la circulación de trayectorias individuales y colectivas en movimientos u organizaciones de otro tipo: partidos políticos, sindicatos, etc. Asimismo, tras el relato de los protagonistas y la reconstrucción de fuentes primarias se hace evidente la ausencia de vínculos orgánicos entre los movimientos sociales abordados en una escala transnacional. Una lectura de mediana duración y más detallada sobre la cuestión nos podría brindar respuestas a la pregunta por la articulación regional de la lucha de sectores subalternos organizados contra el neoliberalismo. También resulta vital indagar en las alianzas coyunturales con movimientos sociales que expresan una base programática diferente e incluso de signo político-ideológico contrario.

Finalmente, la pandemia por COVID-19 ha modificado todos los ámbitos de la vida. Se presenta de interés indagar, no solo en las formas en que se ha transformado la acción colectiva en contexto de restricción de la circulación en el espacio público, sino también en las consecuencias en las demandas de los movimientos sociales latinoamericanos y en la posición de estos respecto de las políticas sanitarias y económicas para su superación

### Obras citadas

Abers, Rebecca Neaera; Rossi, Federico; Von Bulow, Marisa. 2021. "State–Society Relations in Uncertain Times: Social Movement Strategies, Ideational



Contestation and the Pandemic in Brazil and Argentina.” *International Political Science Review* 42, 3, 333-349.

- Anderson, Perry. 2020. *Brasil: Una excepción. 1964-2019*. Buenos Aires: Ediciones AKAL.
- Archila, Mauricio. 2012. “El movimiento estudiantil en Colombia”. *Revista del observatorio social de América Latina* 31, 71-103.
- Ávila Martínez, Ariel e Isaac Morales Pérez. 2021. *Nuevas derechas en Colombia. El progresismo y la izquierda ante la nueva derecha: claves para la región*. Buenos Aires: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Barragán Manjón, Melany, Angélica Abad Cisneros, José Manuel Rivas Otero, Lara Goyburu, Facundo Cruz, Victor Tricot y María Reneé Barrientos Garrido. 2020. “América Latina 2019: Vuelta a la inestabilidad”. *Iberoamericana* 20, núm. 73, 205-41.
- Billion, Didier, y Christophe Ventura. 2020. “¿Por qué protesta tanta gente a la vez?”. *Nueva sociedad* 286, 37-52.
- Bringel, Breno. 2017. “Crisis política y polarización en Brasil: De las protestas de 2013 al golpe de 2016”. En *Protesta e indignación global. Los movimientos sociales en el nuevo orden mundial*, editado por Breno Bringel. Geoffrey Pleyers, 141-54. Buenos Aires: CLACSO
- \_\_\_\_\_. 2020. “Geopolítica de la pandemia, escalas de la crisis y escenarios en disputa”. *Geopolítica(s)* 11(0): 173-87
- Bringel, Breno, y Alfredo Falero. 2016. “Movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado en América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones”. *Caderno CRH* 29, 27-45
- Buitrago, Francisco Leal. 1988. “La profesionalización de los estudios políticos en Colombia”. *Análisis Político* 3, 49-62.
- Calderón, Fernando, y Elizabeth Jelin. 1987. *Clases y movimientos sociales en América Latina*. Buenos Aires: Cedes.
- Canese, Ricardo. 2015. “La restauración neoliberal de Cartes en crisis”. En *Des-Cartes. Estampas de las derechas en Paraguay* editado por Rocco Carbone y Lorena Soler, 57-72. Buenos Aires: Editorial Punto de Encuentro.
- Carrera Damas, Germán. 1999. “Entrevista de Waldo Ansaldi: La conciencia criolla es el producto más auténtico y genuino de la relación de dominación en América Latina”. *Cuadernos del CISH* 4, núm. 5, 153-77.
- Cepeda, Carolina. 2018. “Protesta social y participación política: los riesgos de la incompreensión”. *Cien Días* 94, 38-42.
- Della Porta, Donatella y Mario Diani. 2011. *Los movimientos sociales*. Madrid: CIS

- Diani, Mario. 2015. "Revisando el concepto de movimiento social". *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales* 9, 1-16.
- Domingues, José. 2016. "À esquerda no nevoeiro: trajetórias, desafios e possibilidades". *Novos estudos CEBRAP* 105, 85-101.
- Ganter, Rodrigo, Raúl Zazuri, Karla Henríquez y Ximena Goecke, comps. 2022. *El despertar chileno: Revuelta y subjetividad política*. Buenos Aires: CLACSO.
- Gentili, Pablo. 2018. "Marielle Franco y el Futuro de Brasil. Esperanza o Barbarie". En *Afrodscencias: Voces en resistencia* editado por Rosa Campoalegre Septien, 181-90. Buenos Aires: CLACSO.
- Lachi, Marcelo. 2015. "El 'Nuevo Rumbo' o Proceso de reestructuración del modelo socioeconómico paraguayo". En *Des-Cartes*, 243-78.
- Luna, Juan Pablo, y Cristóbal Rovira Kaltwasser. 2014. *The Resilience of the Latin American Right*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Lustig, Nora. 2020. "Desigualdad y descontento social en América Latina". *Nueva Sociedad* 286, 53-61.
- Martínez Escobar, Fernando Manuel. 2013. "El eje izquierda-derecha en el sistema de partidos políticos del Paraguay". *Paraguay desde las Ciencias Sociales* 2, 1-25.
- Melucci, Alberto. 1994. "¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales?" En *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad*, coordinado por Joseph Gusfield y Enrique Larraña Rodríguez-Cabello, 119-50. Madrid: CIS.
- \_\_\_\_\_. 2015. "El conflicto y la regla: movimientos sociales y sistemas políticos". *Sociológica México* 28, 225-33.
- Mercado, Ana Belén. 2017. "Think tanks, democracia y partidos políticos. el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga durante la reforma constitucional colombiana (1986-1992)". *Millcayac-Revista Digital de Ciencias Sociales* 4, núm. 7, 49-70.
- Modonesi, Massimo. 2008. "Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época." *A Contracorriente: una revista de estudios latinoamericanos* 5, núm. 2, 115-40.
- Morínigo, José Nicolás. 2002. "La transición circular". *NovaPolis* 1, 4-20.
- Natalucci, Ana, y Juan Pablo Ferrero. 2021. "Repensando la nueva dinámica sociopolítica en Argentina y Brasil, 2011-2016". *Estudios Políticos* 60, 326-49.
- Nikolajczuk, Mónica. 2018. "De la construcción de Itaipú a la política energética cartista. Los mecanismos de acumulación por desposesión en Paraguay

(1973-2017)". *E-I@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos* 17, núm. 65, 33-49.

- Observatorio Electoral de América Latina - OBLAT. 2020. *Políticas públicas en América Latina frente al COVID-19*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Palacios-Valladares, Indira. 2020. "Chile 2019: las protestas de octubre y el movimiento estudiantil ¿coyuntura histórica de cambio?". *Revista de Ciencia Política* 40, núm. 2, 215-34.
- Palau, Marielle. 2014. *Movimiento popular y democracia*. Asunción: BASE Investigaciones Sociales.
- Palau, Marielle, Cristina Coronel, Abel Irala y Juan Carlos Yuste. 2018. *Canalización de demandas de los Movimientos Sociales al Estado paraguayo*. Asunción: BASE Investigaciones Sociales.
- Parodi, Camila y Nicolás Sticotti, eds. 2020. *Ecuador: la insurrección de octubre*. Buenos Aires: CLACSO.
- Ramírez Gallegos, Franklin. 2020. *Octubre y el derecho a la resistencia: revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador*. Buenos Aires: CLACSO.
- Rebón, Julián, y Carlos Ruiz Encina. 2020. "Revueltas en y contra el neoliberalismo. Argentina, 2001 y Chile, 2019". *Revista Sociedad* 40, 157-73.
- Retamozo, Martín. 2010. "Movimientos Sociales. Un mapa de la cuestión." En *(Pre) Textos para el Análisis Político. Disciplinas, Actores y Procesos*, editado por Eduardo Villarreal Cantú y Víctor Hugo Martínez González, 233-56. México: FLACSO.
- Rivarola Rocca, Dolores. 2020. "Las mutaciones históricas del antipetismo y el fenómeno Bolsonaro". *Perseu: História, Memória e Política* 19, 244-83.
- Rodríguez, Gina Paola. 2014. "Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una misma derecha?". *Nueva Sociedad* 254, 84-99.
- \_\_\_\_\_. 2018. "Entre la guerra y la paz. La política colombiana en el cambio de siglo (1990-2018)". En *As revoluções na América latina contemporânea: Os desafios do século XXI*, organizado por Marcela Cristina Quinteros y Luiz Felipe Viel Moreira. Maringá: UEM-PGH.
- Rossi, Federico. 2023. *The Oxford Handbook of Latin American Social Movements*. Oxford: Oxford University Press.
- Salas Oroño, Amilcar. 2017. "La democracia brasileña en entredicho: el golpe institucional a Dilma Rousseff". *Revista Paraguaya de Sociología* 52, núm 147, 51-66.

- Santos, Boaventura de Sousa. 2001. "Los nuevos movimientos sociales". *OSAL: Observatorio Social de América Latina* 5, 177-88.
- Skocpol, Theda. 1994. *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soler, Lorena. 2020. "Populismo del siglo XXI en América Latina". *Estado & Comunes*, 1, núm. 10, 17-36.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Derechas: acercamientos conceptuales entre lo 'viejo' y lo 'nuevo'. El progresismo y la izquierda ante la nueva derecha*. Buenos Aires: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Svampa, Maristella. 2009. "Protesta, movimientos sociales y dimensiones de la acción colectiva en América Latina". Ponencia presentada en las Jornadas de Homenaje a Charles Tilly. Universidad Complutense de Madrid-Fundación Carolina.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Del cambio de época al fin de ciclo. Extractivismo, Gobiernos progresistas y Movimientos Sociales en América Latina*. Buenos Aires: Edhasa.
- Taddei, Emilio; Seoane, José y Algranati, Clara. 2006. *Las nuevas configuraciones de los movimientos populares*. Buenos Aires: CLACSO.
- Tarrow, Sidney. 1997. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editora.
- Tilly, Charles, y Lesley Wood. 2009. *Los movimientos sociales: 1768-2008*. Barcelona: Crítica.
- Toret, Javier, coord. 2013. *Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política distribuida*. Barcelona: IN3 Working Paper Series.
- Touraine, Alain. 1987. *El regreso del actor*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- \_\_\_\_\_. 2006. "Los movimientos sociales". *Revista Colombiana de Sociología* 27, 255-78.